

NOTA EDITORIAL

Volenti non fit injuria, afirma el aforismo: quien actúa voluntariamente no puede sufrir injuria; quien consiente, no puede alegar delito. Para sorpresa de algunos, ésta parece ser la posición en la que se están colocando el Gobierno y el PSOE, y en la que desean situar a España: el proceso de acercamiento al secesionismo –terrorista o no– ha ido ya mucho más allá de lo que la debilidad electoral permite explicar en un partido que pueda ser justamente llamado «nacional». Ese acercamiento no ha sido «forzado por las circunstancias»: el trayecto no se ha cubierto con el pesado caminar de quien no desea ir en la dirección que se le indica, no es posible hallar el rastro de esa resistencia, ni siquiera de una mera tarea de dilación, que no pocas veces ha podido apoyarse en dictámenes y opiniones jurídicas solventes. Por el contrario, en esa senda hacia el abismo se ha adentrado el Gobierno confiadamente, a grandes pasos, prestando la amplitud de su zancada a quienes de otro modo nunca hubieran llegado tan lejos, y con un inequívoco gesto de complacencia, hasta el extremo de que, por momentos, parece incluso que la pisada secesionista y la socialista fueran una sola. El presidente Rodríguez Zapatero ha rechazado en varias ocasiones el apoyo incondicional que Mariano Rajoy le ha ofrecido para sacudirse la dependencia electoral que padece, y ha «impulsado» un proceso general de revisión del sistema político de 1978, la consecuente ruptura de la política antiterrorista que concibió y ejecutó el PP con el respaldo del PSOE –inadecuada o excesiva para quien duda de la legitimidad del sistema que debe preservar, lo que obliga a contemplar con otros ojos a quienes atentan contra él–, y el realineamiento exterior a favor de regímenes cuya relación con la democracia es incómoda o de abierta hostilidad, y contra los que han acreditado a lo largo de su historia un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad política.

En apenas un año, las acciones del Gobierno, incluso las que se ubican en áreas que no se encuentran sujetas a la servidumbre secesionista, han sido impregnadas por un radicalismo en la forma y un extremismo en la concepción y en la intención, que permiten contemplar al Ejecutivo socialista como un agente proactivo (*volenti...*), no reactivo, en el desguace de los fundamentos morales y jurídicos del sistema político español. Y, siendo así, lo que está en juego no es un supuesto y deseado aislamiento del Partido Popular –un aislamiento continental, «australiano», en todo caso–, ni la disolución del socialismo español y su conversión en un archipiélago de agrupaciones filonacionalistas; lo que está en juego es la posibilidad de que los españoles puedan exigirse en el futuro el cumplimiento de la Constitución. Ese derecho está a punto de perderlo el PSOE, porque quien consiente, no puede alegar que fue forzado. Éste debiera ser el argumento principal de la defensa de la Constitución y del régimen estatutario vigente –el consentimiento, habitualmente entusiasta, que manifestaron los españoles al aprobar sus estatutos de autonomía–, que es la única garantía real de su autogobierno: el procedimiento mediante el cual la voluntad política de los españoles se convierte en su ley, y las protecciones jurídicas y políticas que garantizan que sólo en los términos previstos esa voluntad podrá ser alterada, lo que garantiza su autenticidad.

Como resultado, lo que procede es un análisis de la ideología que anima las políticas y las «contrapolíticas» socialistas, un estudio de la teoría y de la intención que está en su origen, más que un estudio de la coyuntura electoral. Así, por ejemplo, como afirma Florentino Portero en *La izquierda y su política exterior*, el problema de fondo es que la izquierda española, situada en el extremo de la europea, considera que la extensión de la democracia liberal constituye una amenaza a su proyecto de transformación social, pese a que éste se haya convertido después de la caída del Muro de Berlín en una pura fantasmagoría. Por el contrario, la derecha ha sabido constituir mayorías complejas y de muy extensa base electoral apelando a la defensa de la democracia y de los valores inequívocamente occidentales, como en el caso norteamericano, como expone José María Marco en *Conservadores, liberales y neoconservadores. Fundamentos morales de una sociedad libre*. Ahora, esa nueva sociedad alternativa al Occidente democrático adquiere la forma de un territorio global multicultural que vindica, quizás sin saberlo, el derecho al racismo, a la incultura, a la discriminación de la mujer y a la miseria como rasgos culturales, expresiones del espíritu humano de igual valor –al parecer– que las

que caracterizan a los sistemas políticos y sociales occidentales. Como indica Mikel Azurmendi en *Diez tesis sobre el multiculturalismo*, éste constituye una ideología contraria al liberalismo, al que pretende reformar o liquidar. Lo que realmente existe –y éste es uno de los fundamentos del liberalismo político– son «hombres de carne y hueso», y es a ellos, a nosotros, a quienes se nos presentan los problemas de la libertad, la tolerancia y la convivencia. Por el contrario, el multiculturalismo se concibe como «el discurso del método, y la praxis de la liquidación» de lo que queda de la vieja cultura europea del yo y la libertad, según lo expone José Jiménez Lozano en *La tolerancia y sus «constructos»*. Esos constructos que informan la ideología de la izquierda han dejado su huella en forma de ley. Las leyes educativas socialistas han transformado el sistema educativo español en un erial, asolado por el igualitarismo y la despersonalización de la enseñanza, como explica Javier Orrico en *La ruina de la enseñanza española*. El «buenismo», el relativismo como expresión de la incapacidad para otorgar valor a las cosas y a los sucesos, ha penetrado en la enseñanza y ha liquidado los dos pilares sobre los que se asienta, la tradición y la autoridad, sin los cuales la transmisión de conocimientos es imposible, como nos recuerda Xavier Pericay en *«Buenismo» y sistema educativo*.

En el fondo, la izquierda parece actuar movida por un mero voluntarismo, ignorando los evidentes estragos que sus iniciativas han causado ya, y perseverando en ellas sin enmienda alguna. Una pose contracultural cuyo origen se sitúa a varias décadas de distancia y lo domina todo, ajena a los cambios políticos, económicos y sociales que han acontecido, afanada en revivir tiempos mejores y en crearse enemigos imaginarios que le permitan sofisticar un poco más lo que, en *Otra vez la contracultura*, Joan Font Rosselló denomina «odiología», un victimismo que inhibe cualquier sentido de la responsabilidad y de la culpa, y que libera de la obligación de pensar en el modo de mejorar lo realmente existente. Es la negación de la política entendida como la actividad razonable y moderada, amante de la transacción, que nutre y sostiene las instituciones de una *Nación de ciudadanos*, frente a las comunidades simbólicas opresivas creadas por los nacionalismos, tal y como lo expone Ferran Gallego en el artículo que concluye la reflexión iniciada en el número anterior acerca de la crisis de la democracia española y del papel que los nacionalismos desempeñan en ella (*El malestar de una ilusión*, Cuadernos nº 7). Esa actividad razonada y respetuosa de los tiempos y de las formas previamente pactadas, admite fundamentaciones diversas, confesionales o no, como nos recuerda Teresa Jiménez Barbat en *Por un humanismo secular*, lo que

la hace más inclusiva, y no desprecia la reforma o incluso la alteración profunda del sistema, pero sí la quiebra de los principios políticos y morales que emanan de la concepción de cada individuo como sujeto de derechos sólo disponibles para él. Aquél es el caso de los procesos de descentralización que describe Piedad García-Escudero en *Federalismo, regionalismo y descentralización en Europa: Suiza, Italia y Gran Bretaña*, y éste parece ser ahora el nuestro. Un escenario, en fin, que se complica por los efectos de un incipiente y difuso populismo europeo que rechaza enfrentarse a los hechos y prefiere ignorar el diagnóstico que merece la economía europea. Como afirma Juergen B. Donges en *La economía europea: diagnóstico y pronóstico*, Europa afronta una encrucijada que puede conducirla al progreso o a la progresiva decadencia económica y social. Sin duda, ése es el destino a que nos abocan el voluntarismo y el revisionismo de la izquierda española.

Finalmente, el número 8 de *Cuadernos de Pensamiento Político* contiene las siguientes reseñas: *Nacionalidades históricas y regiones sin historia*, de Roberto Blanco Valdés, por Javier Zarzalejos; *La trampa del consenso*, de Thomas Darnstädt, por Fernando R. Genovés; *Europa y Estados Unidos. Una historia de la relación atlántica en los últimos cien años*, de José María Beneyto, Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez, por Ana Menéndez; *El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936)*, de Stanley G. Payne, por Manuel Álvarez Tardío; *Iconos caídos (Salvador Allende: contra los judíos, los homosexuales y otros «degenerados»)*, de Víctor Farías; y *Mirando atrás. De las filas de ETA a las listas del PSE*, de Teo Uriarte, por Miguel Ángel Quintanilla Navarro.